



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

08 de abril de 2010

Licenciada

Ana Isabel Antillón

Dirección Legislativa

Congreso de la República

Su Despacho

Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día quince de febrero/10, de la **Iniciativa de Ley No. 40 46**, que dispone aprobar **LEY CONTRA LA OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA**.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a la Señora Directora las muestras de mi alta estima.

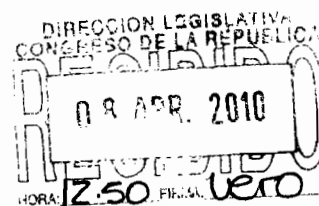


Oliverio García Rodas
Presidente de la Comisión



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Congreso de la República de Guatemala, C. A.

cc. arch.





*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*



DICTAMEN No. 02-2010

INICIATIVA 4046

LEY CONTRA LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

HONORABLE PLENO

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de agosto de 2009, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció la iniciativa **4046** que dispone aprobar Ley Contra la Obstrucción a la Justicia, misma que se remitió el día 13 de agosto del mismo año a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Dicha iniciativa fue presentada por el señor Diputado José Roberto Alejos Cámara.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa **4046** argumenta que el grado de impunidad en nuestro país pone en peligro el Estado de Derecho que nace en la Constitución Política de la República e impide que en el sector público exista un necesario saneamiento en los órganos encargados de impartir justicia de cualquier jurisdicción, ámbito y/o naturaleza de quienes depende en gran medida que la justicia sea tal, pronta y cumplida.

Indica que administrar justicia es un pilar fundamental e insustituible para vivir en democracia. Cuando ésta no es aplicada en forma correcta y eficiente, los encargados de atenderla hacen fallar el sistema de justicia, creando la impunidad; por lo que existe la necesidad de de establecer y desarrollar adecuadamente una normativa legal que viabilice y obligue a investigar en forma permanente y eficaz, especialmente la conducta de quienes se encargan de impartir la administración de justicia. De ello, la necesidad de que existan los mecanismos adecuados que permitan al Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes del país.

Y

[Firma manuscrita]



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

**CONSIDERACIONES DE ORDEN
CONSTITUCIONAL Y LEGAL**

Consideraciones de Oportunidad y Conveniencia:

La Comisión considera que dados los hechos históricos y de la actualidad, se observa que las necesidades y costumbres éticas y morales ya no son las mismas, que consuetudinariamente no nos podemos regir por un patrón de conductas. Se puede observar la necesidad de ir adaptando las leyes a las nuevas modalidades de delincuencia, de formas de vida, pero sobre todo las nuevas necesidades de crear legislación que contribuya a garantizar a los habitantes de la República la justicia, la seguridad y la paz, que permitan una mejor convivencia social, mantener el respeto y la confianza de la sociedad en las autoridades que dirijan el país, pero aún más importante es que se mantenga el respeto y se cumpla por parte de todos los ciudadanos la Constitución Política de la República de Guatemala.

Así mismo considera ésta Comisión que la misión del Congreso de la República, Órgano Político por excelencia y constitucionalmente legitimado para emitir leyes, debe ser la búsqueda del bien común y el bienestar de la población guatemalteca; creando los instrumentos y mecanismos legales que den más eficiencia y celeridad a los otros Organismos del Estado e instituciones encargadas tanto de la seguridad como de la administración de justicia, especialmente mecanismos y cuerpos legales que permitan erradicar delitos y la impunidad de los mismos.

Consideraciones de Orden Constitucional:

Nuestra Carta Magna establece en su artículo segundo que es deber del Estado *garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.*

Dentro de las atribuciones del Organismo Legislativo se contemplan en la literal a) del artículo Constitucional 171, las atribuciones de *decretar, reformar y derogar las leyes*

Es importante recordar sobre el derecho que tiene toda persona de hacer lo que la ley no prohíbe y la última de las frases del preámbulo constitucional, para lo que

[Firma manuscrita]



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

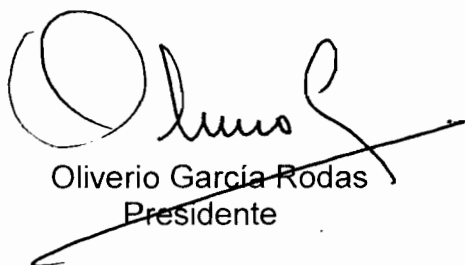
*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

esta iniciativa compete, la frase que reza "...decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho."


DICTAMEN

En base a las consideraciones Constitucionales y Legales vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa **4046** que dispone aprobar la Ley Contra la Obstrucción a la Justicia, por ser un Proyecto de Decreto oportuno, conveniente, necesario y constitucional.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la ciudad de Guatemala, el día 15 de febrero de dos mil diez.



Oliverio García Rodas
Presidente



Rodolfo Anibal García Hernández
Vicepresidente



José Alberto Gándara Torrebiarte
Secretario

Rosa María Ángel Madrid de Frade



Jorge Mario Barrios Falla



Beatriz Canastuj



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Daniel Humberto Caballeros

Francisco José Contreras Contreras

César Augusto Del Águila López

Gladys Anabella De León Ruiz

José Alejandro De León Maldonado

Ronnie Danilo Escobar

Carlos Valentín Gramajo Maldonado

Carlos Enrique López Girón

Félix Ovidio Monzón Pedroza

Héctor Alfredo Nuila Ericastilla

Olivia Lux de Cotti

Mariano Rayo Muñoz

Oscar Valentín Leal

Rosa Elvira Zapeta

LEY CONTRA LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
Congreso de la República de Guatemala

DECRETO NÚMERO ____ 2010

CONSIDERANDO

Que la impunidad es una de las formas de corrupción que implica conductas punibles y/o ilegales y deleznales, que afectan y ponen en peligro al Estado de Derecho que nace de la Constitución Política de la República, la que establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, entre otros valores, la justicia, empezando por los derechos humanos inherentes a la persona y continuando con el derecho de defensa de ésta, siendo sus derechos inviolables, de forma que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos sin haber sido citado oído y vencido en proceso legal ante Juez o Tribunal competente y preestablecido todo de acuerdo a los artículos del 1 al 46 de la Constitución.

CONSIDERANDO

Que el respeto a y la prevalencia de la Constitución Política de la República, es requisito indispensable para que el sistema democrático, fundado en el Estado de Derecho, sea una realidad en el que todos los seres humanos sean libres e iguales en dignidad y derechos, de acuerdo a la Constitución.

CONSIDERANDO

Que el impartimiento de justicia de cualquier jurisdicción, ámbito y/o naturaleza, es un pilar fundamental e insustituible, para la vida en Democracia y el pleno respeto a los derechos humanos, según lo establece la propia Constitución Política de la República.

CONSIDERANDO

Que los funcionarios y empleados de los Organismos encargados de impartir justicia de cualquier jurisdicción, ámbito y/o naturaleza, así como de los demás entes que conforman el sistema de Justicia y el Estado en general, son los primeramente llamados, a actuar con estricto apego a la Constitución y las leyes

12

24

del país, en el ejercicio de su jurisdicción, pues de ellos depende en gran medida que la Justicia sea tal, pronta y cumplida.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política y las leyes de la República, establecen la normativa indispensable para que la justicia sea aplicada en forma correcta y eficiente, siendo en muchos casos, las personas, las que al desatenderlas hacen fallar al sistema de justicia, creando la impunidad.

CONSIDERANDO

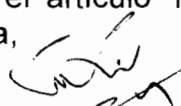
Que es necesario, en consecuencia con los considerandos anteriores, establecer y desarrollar adecuadamente la normativa legal que viabilice y obligue a investigar en forma permanente y eficaz, especialmente la conducta oficial de quienes se encargan de impartir justicia en todos sus ámbitos y jurisdicciones y en general de todo funcionario y empleado público, en lo relativo a la administración de justicia de cualquier ámbito o jurisdicción, debiendo existir los mecanismos adecuados que permitan al Ministerio Público velar en ésta materia en particular, por el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.

CONSIDERANDO

Que es una exigencia pública nacional e internacional, la que pide justicia pronta y cumplida y que ello implica los mecanismos permanentes para que se busque evitar toda conducta, que dificulte, entorpezca, disminuya, nulifique o conculque, el impartimiento de justicia, venga de donde venga.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,



DECRETA:

La siguiente:

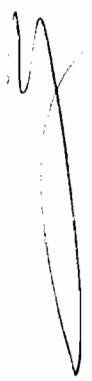
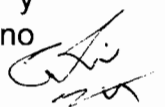
LEY CONTRA LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto de que se cumpla el mandato Constitucional asignado al Ministerio Público, de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, especialmente en función de que la Justicia, en todos sus ámbitos y jurisdicciones se imparta de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Artículo 2º. Investigación por el Ministerio Público. El Ministerio Público por instrucciones de su Jefe o de quién éste designe expresamente, debe investigar la conducta oficial; actuaciones y/o actos de los jueces y de los Magistrados de cualquier jurisdicción y jerarquía; de los fiscales de distrito y de sección y agentes auxiliares fiscales, así como de todo el personal auxiliar y administrativo del Ministerio público y de los órganos que ejercen jurisdicción de cualquier naturaleza y/o ámbito administrativo o judicial, de oficio, para establecer cualquier conducta anómala, anti-ética, inmoral o ilegal en relación al ejercicio de sus funciones, cuando medie información objetiva en relación a cualquier conducta; actuación, omisión de los citados, que impliquen los ilícitos de Obstrucción a la Justicia o de Entorpecimiento a favor de la impunidad, tipificados en esta ley, según lo normado en los subsiguientes artículos que desarrollan la misma.

Artículo 3º. Espíritu de la ley. El Ministerio Público según el caso activará investigación y/o tomará las medidas pertinentes de acuerdo a la Constitución Política, a lo regulado en esta ley a lo establecido en su ley orgánica y demás leyes del país, especialmente el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, referente a la interpretación de la Ley.

Artículo 4º. Sumisión a la ley. Para los efectos de lo estipulado en esta Ley, el Ministerio Público observará principalmente, la norma constitucional que ordena que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella, así como que ningún funcionario o empleado público civil o militar está obligado a cumplir ordenes manifiestamente ilegales, o que impliquen la comisión de un delito, y que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, teniendo toda persona, el derecho de hacer lo que la ley no prohíbe, no



estando obligado nadie a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella y atendiendo primordialmente a que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución.

Artículo 5º. Obligación de investigar. El Ministerio Público a través de las instrucciones de su Jefe o de quién este designe expresamente, está obligado a investigar a los Jueces y Magistrados de cualquier jurisdicción o jerarquía, a cualquier funcionario empleado público o de cualquier jerarquía y a cualquier persona particular, de oficio o a requerimiento de parte, de manera escrupulosa y hasta agotar la investigación por todos los medios legales a su alcance, cuando se tengan indicios objetivos o queja de persona concreta que de información objetiva y/o indicios racionales suficientes de que alguno de los funcionarios o persona particular aludidos realiza o ha realizado conductas, actuaciones y/o actos que tiendan a limitar o impedir el ejercicio legítimo de alguna función jurisdiccional judicial o administrativa reglada de cualquier ámbito o que impliquen insinuaciones o recomendaciones de cualquier tipo, que pudieran impresionar o coartar la libre conducta o criterio de Jueces o Magistrados o funcionarios públicos, apartadas de un quehacer, legal, legítimo y correcto.

Artículo 6º. Interferencia o Coacciones a Jueces, Magistrados y funcionarios públicos. El Juez Magistrado o funcionario público que sufra alguna interferencia ilegal en el ejercicio de su función, lo deberá poner en conocimiento de manera pública o reservada, del Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, el que deberá realizar a través del Ministerio Público la investigación pertinente de ser necesaria, e implementada ésta como paso previo o sin ella, según el caso, procederá a deducir la responsabilidad penal ha que haya lugar, ejercitando la Acción Penal Pública. Cuando El Jefe del Ministerio Público lo crea conveniente y no entorpezca la investigación, lo pondrá en conocimiento de la autoridad principal de la entidad a la que pertenezca o forme parte el Juez, Magistrado, funcionario o empleado público que sufra la interferencia ilegal, así como de cualquier otra entidad o autoridad, y en el caso de las jurisdicciones que competen al Organismo Judicial como tal, a la Corte Suprema de Justicia, y a la Corte de Constitucionalidad en su caso, las que al ser informadas deberán tomar las medidas adecuadas que les competan para cooperar en la cesación de dicha interferencia. Debiendo proceder de la misma manera la autoridad principal notificada según el caso.

En relación a lo regulado en el párrafo anterior, queda expresamente prohibido poner en conocimiento de la autoridad principal y/o subalterna de la entidad a que pertenezca el afectado, cuando la información objetiva y/o indicios racionales

suficientes hagan presuponer que la interferencia ilegal proviene de la propia autoridad principal y/o subalterna de que se trate.

El funcionario que incurra en la prohibición señalada, incurrirá en causa justa para su destitución, independientemente de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

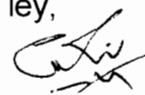
Artículo 7º. Obligación de Colaboración. Con el objeto de viabilizar el mandato establecido en esta ley el Ministerio Público contará a requerimiento de su Jefe o de quién éste designe expresamente, con la cooperación irrestricta y total de toda entidad o persona del Estado e incluso de toda entidad o persona particular. En este último caso, el Ministerio Público deberá costear los gastos de la cooperación que requiere, si así lo pide la persona o entidad requerida.

Artículo 8º. Obligación de comparecer ante el Ministerio Público. El funcionario o empleado público o persona particular investigados, si fueren requeridos por el Jefe del Ministerio Público o quién éste designe expresamente, deberán prestar toda colaboración, que no vulnere sus derechos constitucionales y están obligados a atender las citaciones que les fueren realizadas con expresión de causa, si fueren empleados públicos o personas particulares y a ser recibidos en su despacho o a evacuar audiencia escrita si fueren funcionarios públicos, por o ante el Jefe del Ministerio Público o por o ante quién este designe expresamente.

Artículo 9º. Colaboración Internacional. El Ministerio Público a través de su Jefe o de quién éste designe expresamente podrá solicitar la cooperación de las entidades análogas de los países de la Comunidad Internacional, de los Órganos de Policía o investigación de otros países; de las Autoridades, Organismos o entes internacionales o de cualquier organización, técnica, científica, financiera o de la naturaleza que sea en general, de otro país, que pueda a su criterio, coadyuvar en sus investigaciones derivadas de esta ley.

Las instituciones, oficinas, funcionarios y empleados públicos quedan obligados a realizar los trámites y diligencias necesarias para tal efecto en forma inmediata.

Artículo 10º. Obligación de promover la investigación. La Procuraduría General de la Nación; la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo a sus funciones y fines actuarán coordinadamente con el Ministerio Público cuando sus actividades de alguna manera directa o indirectamente, impliquen materia de la señalada por esta ley,



independiente de que deberán iniciar actuación en relación a sus funciones y competencias de ser requeridas por el Ministerio Públicos a petición de su Jefe, o si a ellos llegare el conocimiento de una conducta que lo amerite según su jurisdicción.

Artículo 11º. Independencia de la Investigación. Por la naturaleza de las facultades y obligaciones establecidas por esta ley al Ministerio Público, la potestad y el deber de investigar, no requiere que previamente se ejercite acción penal pública ante los Tribunales de Justicia por parte del Ministerio Público o civil por la Procuraduría General de la Nación en su caso, las que si deben darse, se plantearán en su oportunidad. Tampoco requiere de la declaratoria que ha lugar de formación de causa o antejuicio, en contra de los funcionarios que gozan de tal prerrogativa, puesto que precisamente su objetivo es garantizar en forma permanente y viable, el resultado de las investigaciones derivadas de ésta ley, para que puedan desembocar cuando sea pertinente, en la prosecución de las conductas ilegales de un funcionario, que den base de ser el caso, a platearse con suficiencia, la petición de antejuicio en contra del funcionario del que se trate y en su momento de la acción judicial permanente.

Artículo 12º. Violación del debido proceso. El Ministerio Público por iniciativa de su Jefe o de quién éste designe expresamente deberá activar investigación según el ámbito y propósitos señalados en esta ley, de manera inexcusable y obligatoria, de oficio o a requerimiento de parte, cuando medien información objetiva y/o indicios racionales suficientes, de conductas, actividades o actos de funcionarios o empleados públicos o personas particulares que impliquen violación, tergiversación, menoscabo, disminución o restricción de los derechos humanos de las personas, así como de las Garantías Constitucionales y/o legales en general, en relación con el impartimiento de justicia, dando noticia oportunamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que ésta también actúe, en función de las atribuciones constitucionales del procurador.

Artículo 13º. Notificación de la investigación. El Ministerio Público por instrucciones de su Jefe o de quién este designe expresamente, para cumplir los fines y funciones de esta ley, realizará las investigaciones derivadas de la misma, según su criterio, de manera pública o reservada de forma que no se entorpezca o afecte la misma, sin embargo el funcionario o empleado público o persona particular de que se trate, deberán ser notificados por el Ministerio Público, a mas tardar dentro de los sesenta días siguientes a iniciada la investigación de que ésta ocurre, sin que por ello deje de atenderse el tenor de los artículos 30 y 31 de la



Constitución Política de la República, referente a la publicidad de los actos administrativos y el acceso a archivos y registros estatales.

Artículo 14°. Plazo para la investigación. Ningún investigación derivada de ésta ley podrá durar más de seis meses, salvo que por su naturaleza o circunstancias el Jefe del Ministerio Público, acuerde de manera razonada ampliar el período de investigación por etapas de tres meses hasta dos veces seguidas como máximo, debiendo notificarse tal acuerdo al investigado. Finalizado el período de investigación el Ministerio Público deberá ejercitar Acción Penal Pública o dar por concluida la investigación y archivar el expediente, pero un caso archivado, podrá ser objeto de una nueva investigación si las circunstancias lo ameritan según acuerdo razonado del Jefe del Ministerio Público.

Artículo 15°. Prohibición de abrir investigación. Queda expresamente prohibido al Jefe del Ministerio Público y a toda otra autoridad de dicha entidad dar inicio a investigación alguna dentro del marco de esta Ley, sin que primero medie información objetiva y/o indicios racionales suficientes de ilícito penal, so pena de incurrir en causa justa de destitución independientemente de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Artículo 16°. Aplicación Complementaria. La Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, se aplicarán en forma complementaria a esta ley, en todo lo que coadyuven y favorezcan a los fines y funciones de la misma, derivados de sus considerandos y de su texto, y no se opondrán a ella, debiendo aplicarse a la normativa de esta Ley, la interpretación extensiva de todas sus normas, respetando los Derechos establecidos por la Constitución y demás leyes.

Artículo 17°. Supremacía Constitucional. El Ministerio Público, las autoridades de todo orden y los particulares en general actuando en el cumplimiento de la presente ley, cuyas normas son de carácter especial en relación a las de cualquier otra ley sin más limitación en su actuación, que las prohibiciones establecidas en ella, así como la observancia de la Constitución y el principio de jerarquía constitucional, es decir que ninguna ley, ni norma es superior a la Constitución ni puede contrariarla, observando estrictamente el tenor del artículo 14 constitucional referente a los principios de inocencia y publicidad del proceso.

Artículo 18°. Investigar en caso de antejuicio. Cuando el Ministerio Público derivado de la investigación o información que posea estime que un funcionario público que goza de Derecho de Antejuicio debe comparecer ante la justicia penal y para ello tramite la declaratoria de que a lugar el Antejuicio ante la autoridad



correspondiente, y el Antejuicio no fuere declarado con lugar, el Ministerio Público está obligado a iniciar acción penal pública contra el funcionario de quien se trate cuando éste cese en el cargo, salvo que las circunstancias y/o los indicios que motivaron la solicitud de Antejuicio fallida se hubieren aclarado y/o desvanecido.

Artículo 20. Reforma al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República. Se adicionan al artículo 9, en su literal c, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, los numerales siguientes:

6) Quien incurra en conductas, actuaciones y /o actos que limiten o impidan o tiendan a limitar o impedir el ejercicio de una función jurisdiccional de cualquier ámbito o naturaleza, o que impliquen insinuaciones o recomendaciones ilegales que pudieran impresionar o coartar la libre conducta de Jueces o Magistrados de cualquier jerarquía y jurisdicción.

7) El funcionario o empleado público o la persona particular, que entorpezca, dificulte u obstruya de cualquier manera ilegal, una investigación sobre obstrucción de justicia.

Artículo 21º. Reforma al Decreto Número 51-92 del Congreso de la República. Se reforma por adición el párrafo 2º. del artículo 10º. del Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal el cual queda así: "El Juez o Magistrado de cualquier jurisdicción que sufra alguna interferencia en el ejercicio de su función lo deberá poner en conocimiento, de manera pública o reservada del Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, el que deberá realizar a través del Ministerio Público la investigación pertinente de ser necesaria e implementada ésta como paso previo, o sin ella según el caso, deducirá la responsabilidad penal a que haya lugar ejercitando la Acción Penal pública. Además cuando el Ministerio Público lo crea conveniente y no se incurra en la prohibición establecida en el artículo cuarto de la Ley Contra la Obstrucción a la Justicia y por tanto no entorpezca la investigación lo pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad según el caso, las que al ser informadas deberán tomar las medidas adecuadas que les competan, de forma que cooperen inmediata y eficazmente en hacer cesar dicha interferencia".

Artículo 22º. Queda derogada cualquier norma legal que se oponga a lo preceptuado en la presente ley.

Artículo 23º. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala, a los _____ días del mes de _____ del año dos mil diez.

